



8 de octubre de 2022

Informe político Coordinadora IUCA

La laguna de Santa Olalla, la que fuera la más grande del Parque Nacional de Doñana, ha muerto. La sequía y la negligente política del gobierno andaluz, cómplice de la desecación de los acuíferos que nutren al parque, están detrás de esta muerte anunciada.

Este es un ejemplo paradigmático de la situación hídrica en toda Andalucía. Comienza el año agrícola con apenas un 25% de agua embalsada, siendo las provincias de Jaén y Córdoba las que peores índices presentan. Si las lluvias de otoño no lo remedian gracias a un cambio de ciclo atmosférico, Andalucía corre serio riesgo de entrar en colapso hídrico. El abastecimiento humano parece garantizado pero no así usos agrarios e industriales. La gestión del agua es, por tanto, uno de los principales problemas de nuestra tierra y lo va a seguir siendo atendiendo a las previsiones de futuro. Según la Agencia Europea del Medio Ambiente la región meridional de la UE es la que más va a sufrir la desertificación. Sin embargo, la gestión del agua del gobierno de Moreno Bonilla hace negacionismo de esta realidad. Sigue apostando por la extensión del regadío, incluso en el entorno de Doñana, a pesar de que es insostenible tanta superficie irrigada, incentiva el derroche suprimiendo el canon del agua y pretende desviar la atención generando falsas expectativas de solución en la realización de infraestructuras hidráulicas.

El impacto de la escasez de agua y de las olas de calor, con el consiguiente aumento de la evapotranspiración, ha sido tremendo en la agricultura. Cerca de un 80% de

las cosechas de secano se han perdido. A estos condicionantes climáticos se ha de sumar el estrangulamiento del sector provocado por los gigantes agroalimentarios que dominan la cadena alimentaria asfixiando a los productores y especulando con los precios para los consumidores. En definitiva, Andalucía requiere una reforma integral del sector agrícola que contemple una nueva cultura del agua y una aplicación efectiva de la ley de la cadena alimentaria enmarcada en una estrategia de soberanía alimentaria. La pervivencia del sector agroganadero y del medio rural andaluz depende de ello.

A la hipótesis de colapso hídrico se suma la hipótesis de colapso energético en la UE. Como advierte, entre otros expertos, Antonio Turiel, este invierno hay serio riesgo de quiebra de la industria europea, dependiente hasta ahora del gas ruso que ha dejado de llegar. A esto hay que añadir la falta de petróleo, especialmente del su derivado, el diésel. Las consecuencias de esta falta de energía serán enormes. Hay riesgo de que quiebre BASF, la Lehman Brothers de la industria europea, generando un efecto cascada que se lleve por delante industrias con el consiguiente aumento del desempleo y la miseria. Ni con cortes de luz rotatorios ni medidas coyunturales se hará frente con solvencia a un problema estructural del modo de producción capitalista sustentado en el consumo masivo de energía fósil. Hemos de hegemonizar un el debate en torno a las alternativas de transición ecosocial antes de que el impacto y shock social por las restricciones venideras sean caldo de cultivo de propuestas ecofascistas.

La inflación es el principal problema de las familias trabajadoras y pymes andaluzas. Una carestía del coste de la vida que afecta gravemente en una comunidad autónoma con la renta per cápita un 25% inferior a la media del país y líder en tasa de desempleo. Especialmente lesivo está siendo el aumento del coste del alquiler y compra de vivienda. La regulación del precio de la vivienda es impostergable en Andalucía. La especulación inmobiliaria está dejando exhaustas las cuentas de las familias trabajadoras, estudiantes y pensionistas. La negativa explícita del gobierno de Moreno Bonilla a intervenir en el mercado para aliviar la asfixia económica provocada por la inflación y para garantizar el derecho a la vivienda es inaguantable. La subida de tipos de interés por parte del BCE va a ralentizar la economía y provocar paro mientras el gobierno andaluz se apresta a proteger los fondos de inversión que están detrás del sector inmobiliario.

Esta es la tónica del nuevo gobierno de Moreno Bonilla: redundar en las políticas neoliberales que hacen pagar la crisis a la mayoría social para proteger los privilegios de una minoría. Su receta es siempre bajar impuestos a los ricos aunque sigue sin ejecutar fondos de los que dispone, más de 2500 millones de euros.

Bajo ese objetivo se entiende su bonificación del impuesto de patrimonio a una minoría enriquecida. Entra a librar la batalla cultural denostando los impuestos y sacralizando la propiedad. Esa minoría enriquecida debería pagar más impuestos de los que pagaban. El patrimonio de esta minoría enriquecida es producto de las condiciones socioeconómicas que brinda Andalucía gracias al esfuerzo de todas y todos así como de las plusvalías generadas por el trabajo de otros. El paraíso fiscal para unos pocos se sustenta sobre el desmantelamiento del estado del bienestar.

No es casualidad que las comunidades autónomas de Madrid y Andalucía sean las que menos invierten en sanidad por habitante mientras son las que menos impuestos cobran a los ricos. Las políticas fiscales regresivas se han demostrado un fracaso, no sólo en términos de justicia social, también en el negativo impacto para las dinámicas económicas. Así lo están advirtiendo el FMI y la UE, instituciones conscientes de que la grave coyuntura económica mundial requiere de estados con capacidad de intervención.

Las políticas redistributivas son las que hacen país. Avanzar en una fiscalidad progresiva es ir en la línea correcta para reducir la pobreza, sostener el estado de bienestar y recuperar parte de los beneficios generados por el esfuerzo de la clase trabajadora que se apropian unos pocos.

La radicalidad de Moreno Bonilla por la ortodoxia neoliberal se ha vuelto a traducir en un inicio de curso escolar con recortes en la enseñanza pública. La Consejería de Educación ha recortado un 50% de las plazas de refuerzo de profesorado con respecto al curso pasado y sigue incumpliendo la ley de bioclimatización de las aulas por falta de inversión. La oportunidad que brinda el descenso de la natalidad para bajar la ratio de las aulas se está utilizando para cerrar líneas en centros educativos públicos. No ocurre igual con la enseñanza privado concertada a la que se le da atención prioritaria. Especialmente grave es la entrega de la formación profesional a fondos de inversión. Mientras la Consejería cuenta con 300 millones de fondos específicos para FP se queda alumnado sin

plaza en centros públicos y a merced de entidades privadas con precios prohibitivos para las familias trabajadoras.

Decimos que Moreno Bonilla es un radical porque tiene declarada una guerra total y absoluta a lo público. Al adelgazamiento del Estado con políticas fiscales regresivas que ahogan la recaudación se suman recortes en servicios públicos y ayudas al sector privado. Esto está llevando a la desaparición progresiva de los servicios sociales públicos. Terreno en el que la administración andaluza cada vez delega más con conciertos y privatizaciones. Los servicios sociales son un pilar básico del estado del bienestar y una garantía de igualdad que queda quebrada con la política del Partido Popular.

Homólogo proceso de deterioro del servicio público y privatización encubierta (con sostén público mediante conciertos) se experimenta en el sistema andaluz de salud. El mantra de que “lo privado funciona mejor” es una falacia a la vista de todos cuando ya son notorias las colas y retrasos en las clínicas privadas. Mientras, la atención primaria y las citas con especialistas siguen con demoras injustificables cuando ya no hay un impacto de la pandemia como excusa. Por eso hay que celebrar el éxito del encuentro de la Marea Blanca. Es demostración de que el tejido social comprometido con la sanidad pública va a dar la batalla frente a la mayoría absoluta radical y neoliberal del Partido Popular para defender el derecho a la salud. IUCA se va a implicar para que la movilización de noviembre sea todo un éxito.

El radical afán privatizador de Moreno Bonilla ha puesto el ojo en el saneamiento del agua. Hay que recordar que el derecho humano al agua y al saneamiento está

reconocido por las Naciones Unidas. Es del todo inaceptable que Moreno Bonilla quiera mercantilizar un derecho humano. Su justificación se basa en premisas absolutamente falsas ya que la privatización del saneamiento del agua supondría un mayor coste para las arcas públicas y un encarecimiento por la prestación del servicio. La consecuencia de esta política supone dejar a los ayuntamientos en manos de grandes empresas al no tener capacidad el ayuntamiento, por falta de recursos, para desarrollar infraestructuras hídricas.

En esa línea de rivalizar con Ayuso por ser más radical y neoliberal, Moreno Bonilla ataca al sector del taxi haciendo un decreto a la medida de los fondos buitres que operan detrás de las vtc. El Gobierno andaluz debe cumplir con su responsabilidad de salvaguardar el sector del taxi, como servicio público esencial que es. Ese es el mejor modo para que salga ganando la ciudadanía, que muy al contrario, cuando se da rienda suelta a estas multinacionales siempre sale perdiendo, ya que suben los precios y bajan las condiciones de seguridad.

La radicalidad neoliberal, la falta de diálogo y la negación del pluralismo son las señas del inicio del mandato de Moreno Bonilla. Por primera vez en la historia democrática de Andalucía se pretende excluir a un grupo parlamentario del consejo de RTVA. En virtud del pacto de la vergüenza entre PP, PSOE y VOX quieren dejar fuera a Por Andalucía. Es un golpe al propio ente público, RTVA, al impedir la fiscalización de Por Andalucía, y un golpe al pluralismo político que existe en la sociedad andaluza y que se ha expresado la conformación de los distintos grupos



8 de octubre de 2022

parlamentarios. El objetivo de dejar fuera de RTVA a Por Andalucía es el de seguir convirtiendo RTVA en un ente al servicio de los intereses de la derecha.

En contraste con la estrategia del gobierno andaluz de regresividad fiscal y de recorte de servicios públicos, el gobierno central tiene que ser valedor de políticas valientes que defiendan a la mayoría social, máxime en esta coyuntura de crisis e incertidumbre. Así, celebramos que se abra paso una política fiscal que hace recaer más carga fiscal en quienes se enriquecen en nuestro país mientras se empobrecen las capas populares. Por eso aplaudimos desde Andalucía, paraíso fiscal de los ricos, el impuesto a las eléctricas y el previsto a las grandes fortunas. El acuerdo de gobierno central sobre fiscalidad contempla recaudar 1.500 millones de euros por el impuesto a las grandes fortunas, incrementos en el IRPF a las rentas superiores a 200.000 euros y bajadas de IRPF a rentas 21.000 euros, y una impronta feminista con la bajada del IVA en los productos menstruales. En este sentido, los progresos en políticas feministas del gobierno de coalición no tienen parangón en la UE y se han convertido en toda una referencia en el resto del mundo.

Este acuerdo fiscal se enmarca en la presentación de unos presupuestos generales, fruto del acuerdo en el gobierno de coalición, beneficiosos para Andalucía. Los PGE buscan **proteger a los más vulnerables y a las familias trabajadoras**

(incremento del gasto social en un 10.5%, incremento del gasto por desempleo, incremento de las pensiones, revalorización del IMV, subida del IPREM, prórrogas del abono de transporte y de las ayudas de vivienda, etc.); **reforzar los servicios públicos** (incrementos en dependencia, salud, educación, aumento salarial

funcionarios, etc.); **avanzar en unos presupuestos más feministas poniendo el foco en los cuidados** (ayudas a madres con hijos entre 0 y 3 años, asimilación de familias monomarentales con dos hijos a la condición de familias numerosas, incrementos del 12% en la lucha contra las violencias machistas, etc.); y poner **más recursos para las comunidades autónomas y los ayuntamientos**.

No obstante, siguiendo el impulso social de este paquete fiscal, es primordial en este curso político un avance en medidas que mitiguen el impacto de la inflación en las familias trabajadoras (aumento del salario mínimo, topar precio de productos básicos, etc.), cumplir con acuerdos pendientes del pacto de gobierno (ley mordaza, ley de vivienda, etc.) y con una reforma de la financiación local.

El malestar y la incertidumbre por el futuro afecta al estado de ánimo de una mayoría social que debe recibir protección de sus gobiernos y seguridad en torno al futuro. El caldo de cultivo de la ultraderecha está en la desafección política provocada por esa orfandad en la que las familias trabajadoras se encuentran en situaciones de crisis cuando el Estado no interviene garantizando unos mínimos estándares de calidad de vida y de expectativas futuras, y está en el papel que algunos medios de comunicación juegan blanqueando las propuestas políticas reaccionarias y fascistas.

No podemos ser ajenos a esa realidad, crudamente afirmada con la victoria de la ultraderecha en Italia, a pocos meses de las elecciones municipales.

Estamos viviendo el efecto en diferido de las políticas de la troika durante la crisis de 2008. La desafección política se nutre de la creciente desigualdad. El avance del fascismo se para con más derechos, más igualdad social y con unidad popular.

Las elecciones municipales se dan en estas coordenadas de malestar social y avance cultural de la ultraderecha. IUCA es conocedora de la importancia del municipalismo: este ha sido, y es, un vector de transformación democrática y de modernización al servicio de la mayoría social. Por el contrario, la derecha que está en los gobiernos municipales andaluces está poniendo a los ayuntamientos al servicio de especuladores y fondos de inversión.

Traducir la estrategia de unidad popular en estas elecciones municipales nos remite a lo más genuino y esencial de nuestro proyecto político.

IUCA ha sido capaz de ser punto de encuentro en muchos casos, y de agregarse en otros, a movimientos sociales, a ciudadanos y ciudadanas y a otras fuerzas políticas en torno a la construcción de programas políticos para transformar sus pueblos y ciudades.

Participación popular, programa y unidad. Esa ha sido una constante en la historia de IUCA. Porque venimos de ahí, de enlazar la política con la gente. Desplegamos políticas que cambian la vida cotidiana de nuestros vecinos y vecinas, y que, también, esbozan otro modelo de sociedad, otro modelo económico y otros valores y principios alternativos al neoliberalismo.

Andalucía y nuestro país atraviesan una coyuntura crítica. Políticas largamente postergadas cuando no ignoradas son hoy una necesidad ineludible. La crisis ecológica ya está aquí, el colapso hídrico es una posibilidad. La vida ya no podrá ser como ha sido hasta ahora. La desertificación, las olas de calor y la escasez

energética y de materias primas exigen una respuesta desde lo local para, simplemente, garantizar la pervivencia muchos pueblos.

Esta crisis ecológica y la propia pandemia han evidenciado otra fatalidad de Andalucía que también se debe acometer desde lo local: un cambio de modelo productivo alternativo a la precariedad, al derroche energético, al despoblamiento y a la gentrificación.

Por eso tenemos que tener claro qué queremos conseguir en esta coyuntura crítica, cuáles son los objetivos de IUCA para estas elecciones municipales.

Lo primero para lo que nos conjuramos es para que haya un giro de izquierdas, un giro social, en Andalucía. Queremos ser motor de ese cambio en nuestra tierra. La izquierda tiene que tomar la palabra en Andalucía para mejorar la vida de la gente, para dar presente y futuro a nuestros pueblos y ciudades. Para ello, nuestro segundo objetivo, obligatorio para conseguir lo anterior, ha de ser aumentar la representación institucional. Continuar gobernando allá donde lo hacemos y alcanzar nuevos gobiernos donde todavía no gobernamos. Y, en tercer lugar, queremos esa mayoría progresista en los pueblos y ciudades andaluzas porque queremos impulsar un nuevo país. La construcción de un nuevo país necesita del municipalismo. Hoy los grandes debates que afronta el país y los cambios que ha de acometer se juegan también en los ayuntamientos.

Para conseguir esos objetivos debemos entender que las elecciones municipales no se resuelven solo con una candidatura y una campaña electoral, aunque sean imprescindibles. Hace falta mucho más.

Tenemos que propiciar y desarrollar desde ya, sin demora, y hasta el día de la votación un proceso político amplio que involucre a nuestros vecinos y vecinas, que sume a movimientos y organizaciones, y que hegemonice el debate público. Involucrar, sumar y hegemonizar. Aglutinar en torno a unas ideas a quienes padecen la falta de vivienda, de equipamientos públicos...y a quienes día a día luchan. Aglutinar a quienes están concienciados pero también a quienes no lo están. El proceso político tiene que involucrar a la gente en la política porque estamos hablando de qué pasa con el comercio local de su barrio, con el carril bici que no llega a su trabajo, con la guardería pública que no existe en el barrio, con el aumento disparado del precio de su alquiler, con las macroplantas de fotovoltaicas que destruyen nuestros paisajes...con todo eso que ocupa y preocupa a la gente pero que hoy vive como un problema individual. Para los problemas colectivos hay que crear conciencia colectiva, de eso va el proceso político que hemos de desplegar.

Las organizaciones locales y provinciales de IUCA deben propiciar candidaturas unitarias que garanticen la máxima representación posible en los ayuntamientos y diputaciones. Unos procesos que deben darse por abajo, desde y con las bases, respondiendo a los objetivos que todas y todos nos marcamos.

Nos comprometemos a sumar cuanto podamos. Un compromiso por sumar que ha de ser tan honesto como alto es el aprecio que tenemos por IUCA. Por eso celebramos que Más País-Andalucía, Iniciativa Por Andalucía y Verdes-Equo estén impulsando junto a IUCA procesos abiertos y democráticos para involucrar a la ciudadanía en el proceso político de cara a las municipales y configurar candidaturas amplias y plurales. Entendemos que Podemos, Alianza Verde y otras

fuerzas progresistas deben incorporarse y ser coprotagonistas junto al resto de formaciones políticas y movimientos sociales implicados. Hemos de mirar por los intereses de la mayoría social andaluza y hacer realidad la posibilidad de cambio político en los pueblos y ciudades en los que gobierna la derecha. Todas estas fuerzas políticas coaligadas, sin perder sus identidades, han de ser capaces de lograr lo que el electorado progresista demanda. Construir candidaturas con personas independientes, movimientos sociales y con la nítida expresión de las distintas fuerzas políticas coaligadas en la papeleta. No hay tiempo que perder, los procesos iniciados en las localidades en los que participa IUCA tienen que avanzar para involucrar a la ciudadanía y presentar candidaturas fuertes. La parsimonia sería una irresponsabilidad.

Las elecciones municipales se producen en un contexto de enormes incertidumbres y de crisis (hídrica, energética, bélica...), y a pocos meses de unas elecciones generales. Nos jugamos el país desde los municipios. IUCA va a estar a la altura porque somos garantía de políticas valientes, como demostramos allá donde gobernamos, que van en la línea correcta para dar futuro y esperanzas a la mayoría social. Son posibles una gestión sostenible de los recursos hídricos, un despliegue de servicios públicos que garanticen los cuidados, una planificación urbana y políticas de vivienda que hagan valer el derecho a la vivienda, una movilidad sostenible que evite el derroche energético, unas políticas de empleo para mitigar el desempleo en nuestros municipios, un impulso desde lo local a desarrollos económicos endógenos...Intervenimos en realidades que demuestran que es posible la esperanza para nuestros pueblos y ciudades en estas elecciones municipales.



8 de octubre de 2022